



# Asamblea General

Distr. general  
2 de abril de 2014  
Español  
Original: inglés

---

**Consejo de Derechos Humanos  
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre  
la Detención Arbitraria en su 68º período de sesiones  
(13 a 22 de noviembre de 2013)**

**Nº 53/2013 (Jordania)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 9 de septiembre de 2013**

**Relativa a los Sres. Hisham Al Heysah, Bassem Al Rawabedah, Thabet Assaf y  
Tarek Khoder**

**El Gobierno no ha respondido a la comunicación.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. El mandato fue prorrogado por otros tres años mediante la resolución 24/7, de 26 de septiembre de 2013. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14 y 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22 y 25 a 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);



c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de retención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

3. Hisham Al Heysah, nacido en 1986, es nacional de Jordania y tiene su residencia habitual en Ammán. Trabaja como profesor.

4. Bassem Al Rawabedah, nacido en 1970, es nacional de Jordania y tiene su residencia habitual en Irbid (Jordania). Está casado y es propietario de un supermercado local.

5. Thabet Assaf, nacido en 1988, es nacional de Jordania y tiene su residencia habitual en Karak (Jordania). Ejerce como Coordinador General y Portavoz del Movimiento Juvenil Islámico de Jordania.

6. Tarek Khoder, nacido en 1988, es nacional de Jordania y tiene su residencia habitual en Ammán. Está casado y trabaja en una empresa de accesorios para teléfonos móviles.

7. Los Sres. Al Heysah, Al Rawabedah, Assaf y Khoder son miembros del Movimiento Juvenil Islámico de Jordania. La fuente señala que ese movimiento defiende la adopción de reformas civiles y económicas, por ejemplo organizando manifestaciones contra el aumento de los precios del combustible y las restricciones a las libertades fundamentales en el país.

8. Según la fuente, el Sr. Al Heysah fue detenido por primera vez el 13 de junio de 2013. Al parecer, no le comunicaron los motivos de la detención y la reclusión, que se prolongó cuatro días hasta que fue puesto en libertad el 17 de junio de 2013. El día de su liberación, el Sr. Al Heysah participó en una manifestación organizada por el Movimiento Juvenil Islámico de Jordania. Al día siguiente, el 18 de junio de 2013, recibió una citación para comparecer ante el Fiscal Militar del Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania para realizar unos trámites rutinarios en relación con su puesta en libertad. Cuando llegó al Tribunal, le pidieron que firmase un documento en el que declaraba estar en contra de las manifestaciones, a lo cual parece ser que se negó. Después, el Sr. Al Heysah fue detenido de nuevo en el edificio del Tribunal de Seguridad del Estado y enviado directamente a la prisión de Al Zarqaa, en la provincia de Al Zarqaa.

9. La fuente indica que el Sr. Al Heysah fue interrogado por el Fiscal Militar del Tribunal de Seguridad del Estado sin la presencia de un abogado. El 3 de julio de 2013, fue inculcado de comprometer el sistema político de Jordania e instigar sentimientos en contra de este, acusación basada en el artículo 149 del Código Penal de Jordania. El Sr. Al Heysah compareció por primera vez ante el Tribunal de Seguridad del Estado el 4 de septiembre de 2013 y su juicio fue aplazado hasta el 1 de octubre de 2013.

10. Según se informa, el Sr. Al Rawabedah fue detenido el 19 de junio de 2013 tras participar en una sentada frente a la sede del Consejo de Ministros en Ammán para exigir la liberación del Sr. Al Heysah. Cuando regresaba con su familia después de la manifestación, su vehículo fue interceptado en un puesto de control en la carretera principal entre Ammán e Irbid, en torno a la medianoche. El Sr. Rawabedah fue detenido allí mismo, pero sus familiares pudieron marcharse. Al parecer, fue conducido a la comisaría de policía de Irbid, donde permaneció varias horas antes de ser trasladado a la comisaría de policía de Ammán en el transcurso de la noche.

11. Al día siguiente, el 20 de junio de 2013, el Sr. Al Rawabedah fue interrogado por el Fiscal Militar del Tribunal de Seguridad del Estado sin la presencia de un abogado; luego fue enviado a la prisión de Al Zarqaa. El 2 de septiembre de 2013, fue trasladado a la prisión de Remamin en Ammán. El Sr. Al Rawabedah fue acusado de los mismos delitos que el Sr. Al Heysah. El Sr. Al Rawabedah compareció ante el Tribunal de Seguridad del Estado el 4 de septiembre de 2013 y su juicio se aplazó hasta el 1 de octubre de 2013.

12. El 4 de julio de 2013, el Sr. Assaf y el Sr. Khoder fueron detenidos enfrente de la Plaza Coliseo de Roma en Ammán por agentes de los Servicios Especiales de Seguridad, conocidos también como Fuerzas de Seguridad Preventiva, que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública. La fuente señala que fueron detenidos inmediatamente después de participar en un debate sobre los acontecimientos políticos acaecidos en Egipto. La fuente transmite al Grupo de Trabajo varios informes recibidos en los que se señala que el principal motivo de la detención fue su anterior participación en manifestaciones relacionadas con el aumento de los precios del combustible y las nuevas enmiendas introducidas en la Ley de prensa y publicaciones. El día de su detención, los dos hombres fueron conducidos a la sede de los Servicios Especiales de Seguridad en Ammán, donde permanecieron dos días.

13. El 6 de julio de 2013, el Sr. Assaf y el Sr. Khoder fueron trasladados al Tribunal de Seguridad del Estado, donde fueron interrogados por el Fiscal Militar. La fuente señala que no hubo ningún abogado presente durante el interrogatorio. Más tarde ese mismo día, el Sr. Assaf y el Sr. Khoder fueron trasladados a la prisión de Al Jwaideh, en el este de Ammán, donde permanecieron detenidos durante una semana. Hasta entonces, ambos estuvieron presuntamente recluidos en régimen de incomunicación sin que se les informara del lugar en que se encontraban. El 13 de julio de 2013, fueron trasladados a la prisión de Al Zarqaa, donde se permitió la visita de sus familiares. Tanto el Sr. Assaf como el Sr. Khoder han sido acusados de instigar sentimientos contra el sistema político en violación del artículo 149 del Código Penal, pero todavía no han sido inculcados oficialmente. El Sr. Assaf sigue detenido en la prisión de Al Zarqaa, mientras que el Sr. Khoder fue trasladado a la prisión de Irbid, situada en la provincia de Irbid, el 2 de septiembre de 2013.

14. A fin de protestar contra su detención arbitraria, los cuatro detenidos iniciaron una huelga de hambre el 9 de agosto de 2013. A ese respecto, la fuente transmite informes que indican que las autoridades penitenciarias se negaron en alguna ocasión a suministrarles líquidos. La fuente teme que ello pueda producir una insuficiencia renal.

15. La fuente comunica que el Tribunal de Seguridad del Estado trabaja en estrecha colaboración con la Dirección General de Inteligencia y está integrado por dos jueces militares y un juez civil, todos ellos nombrados por el Primer Ministro. La fuente alega que el Tribunal de Seguridad del Estado es conocido por ignorar el derecho de los acusados a un juicio imparcial. La fuente hace referencia al reglamento del Tribunal, que exige que los fiscales hagan comparecer a los acusados ante el Tribunal de Seguridad del Estado dentro de los 7 días siguientes a su detención. Las disposiciones permiten prorrogar ese plazo, a discreción del fiscal, hasta un total de 15 días. La fuente sostiene que, en la práctica, los detenidos se encuentran a veces privados de libertad durante períodos mucho más

prolongados sin ser juzgados. Además, en muchos casos, los acusados no han tenido acceso a asistencia letrada, especialmente durante las investigaciones. Los procedimientos del Tribunal establecen, asimismo, que las declaraciones realizadas al fiscal, que forman la base de las actuaciones judiciales, deben ser voluntarias, pero muchos acusados afirman posteriormente que realizaron las declaraciones bajo coacción.

16. La fuente precisa que el Tribunal es competente para conocer de los delitos tipificados en el Código Penal que se considere que atentan contra la seguridad interna o externa de Jordania y estén relacionados con estupefacientes, explosivos, armas, espionaje y alta traición, pero también los delitos relacionados con declaraciones pacíficas. Aunque la competencia del Tribunal se redujo a cinco ámbitos durante el proceso de reforma de 2011 y fue confirmada por una decisión del Consejo de Ministros sobre la base de las órdenes reales el 1 de septiembre de 2013, la disposición sigue siendo demasiado imprecisa, a juicio de la fuente, dando cabida a una aplicación amplia y arbitraria, lo que permite al Tribunal utilizar sus facultades en detrimento de los manifestantes, los empleados de los medios de comunicaciones y los miembros de la oposición.

17. La fuente indica que las personas a las que se refiere el presente caso fueron detenidas por participar en manifestaciones. Por lo tanto, considera que su detención y encarcelamiento vulneran la libertad de reunión pacífica. Además, ninguna de estas cuatro personas estuvo asistida por un abogado durante los interrogatorios y han sido remitidas para su enjuiciamiento ante el Tribunal de Seguridad del Estado que, según la fuente, es probable que no pueda garantizar un juicio imparcial. La fuente sostiene que su detención se inscribe en las categorías II y III de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le han presentado.

18. La fuente alega que el Sr. Al Heysah fue detenido después de negarse a firmar un documento declarando que estaba en contra de las manifestaciones organizadas por el Movimiento Juvenil Islámico de Jordania; que el Sr. Al Rawabedah fue detenido después de participar en una manifestación; y que el Sr. Assaf y el Sr. Khoder fueron detenidos después de un debate público y de participar en manifestaciones. Por consiguiente, aduce que la detención y el encarcelamiento actual de esas personas guardan claramente relación con su ejercicio de la libertad de opinión y expresión y la libertad de reunión, consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Jordania ratificó el 28 de mayo de 1975.

19. La fuente señala a la atención del Grupo de Trabajo el artículo 19, párrafo 2, del Pacto: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión". También señala a su atención el artículo 21 del Pacto: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica". La fuente considera que las autoridades jordanas detuvieron a esas cuatro personas en violación de los derechos y las libertades que protege el Pacto y afirma que, por lo tanto, su detención se inscribe en la categoría II de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le han presentado.

20. Por lo que se refiere a las alegaciones de que estas cuatro personas no tuvieron acceso a un abogado en ningún momento del interrogatorio y de que fueron juzgadas por el Tribunal de Seguridad del Estado como resultado de esos interrogatorios, la fuente sostiene que ello vulnera las normas internacionales relativas a un juicio imparcial, consagradas en los artículos 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto.

21. La fuente menciona el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, según el cual "[t]oda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella". También hace referencia al artículo 14, párrafo 3 c), que puntualiza que todo acusado tiene derecho a "ser juzgado sin dilaciones indebidas", y párrafo 3 d), que establece que toda persona tiene derecho a

"defenderse personalmente o ser asistida por un defensor". Sobre la base de lo que antecede, la fuente afirma que esa inobservancia de las normas internacionales relativas a un juicio imparcial hace que la detención de los peticionarios tenga carácter arbitrario y se inscriba en la categoría III de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le han presentado.

22. La fuente ha informado ulteriormente al Grupo de Trabajo de que, el 10 de septiembre de 2013, el Tribunal de Seguridad del Estado celebró otra vista con los Sres. Al Heysah y Al Rawabedah, pero que luego se aplazó hasta el 24 de septiembre debido a la ausencia de testigos de cargo.

23. La fuente ha informado, además, al Grupo de Trabajo de que los cuatro hombres abandonaron la huelga de hambre el 14 de septiembre para evitar un mayor deterioro de su salud.

#### *Ausencia de respuesta del Gobierno*

24. El 9 de septiembre de 2013 se envió una comunicación al Gobierno de Jordania solicitándole una respuesta a las alegaciones formuladas. El Grupo de Trabajo señaló que agradecería que, en su respuesta, el Gobierno de Jordania facilitase al Grupo de Trabajo información detallada sobre la situación actual de los Sres. Al Heysah, Al Rawabedah, Assaf y Khoder y aclarase las disposiciones legales que justificaban que continuasen detenidos.

25. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido a la solicitud formulada. A pesar de que el Gobierno no ha facilitado ninguna información, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de pronunciarse sobre la detención de los Sres. Al Heysah, Al Rawabedah, Assaf y Khoder, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 16 de sus métodos de trabajo.

### **Deliberaciones**

#### *Carga de la prueba*

26. El Grupo de Trabajo destaca que el Gobierno de Jordania no ha refutado las alegaciones fidedignas y fundamentadas presentadas por la fuente. El Grupo de Trabajo remite a su jurisprudencia constante, siendo la más reciente sus opiniones N° 41/2013 (Libia) y N° 48/2013 (Sri Lanka), y recuerda que, cuando se denuncia que a una persona la autoridad pública no le ha reconocido ciertas garantías procesales a las que tiene derecho, la carga de demostrar el hecho negativo que aduce el demandante recae en las autoridades públicas, porque estas son, en general, "capaces de demostrar que han seguido los procedimientos adecuados y aplicado las garantías previstas por la ley (...) presentando las pruebas documentales de las diligencias llevadas a cabo"<sup>1</sup>.

27. El Comité de Derechos Humanos ha adoptado un enfoque similar, según el cual la carga de la prueba no puede atribuirse exclusivamente al autor de la comunicación, especialmente si se tiene en cuenta que el autor y el Estado parte no siempre tienen igual acceso a los elementos de prueba y, con frecuencia, solo el Estado parte posee la información pertinente<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Ahmadou Sadio Diallo (la República de Guinea c. la República Democrática del Congo)*, fondo, fallo, I.C.J. Reports 2010, pág. 639, párr. 55.

<sup>2</sup> Véanse, por ejemplo, las comunicaciones N° 1412/2005, *Butovenko c. Ucrania*, dictamen aprobado el 19 de julio de 2011, párr. 7.3; N° 1297/2004, *Medjnoune c. Argelia*, dictamen aprobado el 14 de julio de 2006, párr. 8.3; N° 139/1983, *Conteris c. el Uruguay*, dictamen aprobado el 17 de julio

*El Tribunal de Seguridad del Estado*

28. El Grupo de Trabajo ha tomado nota con preocupación de las alegaciones de la fuente sobre el Tribunal de Seguridad del Estado.

29. El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos han recomendado reiteradamente a Jordania que suprima los tribunales especiales como el Tribunal de Seguridad del Estado; por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos señaló en el párrafo 12 de sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Jordania (CCPR/C/JOR/CO/4), en 2010, lo siguiente:

El Comité reitera su preocupación por la escasa independencia, orgánica y funcional, del Tribunal de Seguridad del Estado. También le preocupa que el Primer Ministro tenga facultades para remitir a esta jurisdicción asuntos que no están relacionados con la seguridad del Estado (...).

El Comité recomienda de nuevo al Estado parte, como hizo en 1994, que prevea la supresión del Tribunal de Seguridad del Estado (CCPR/C/79/Add.35, párr. 16).

30. En su Observación general N° 32 (2007) sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, el Comité de Derechos Humanos señaló que las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes de justicia comprendidos en el ámbito de ese artículo, sean ordinarios o especializados, civiles o militares (párr. 22)<sup>3</sup>.

31. En su informe anual de 2007 (A/HRC/7/4, párr. 59), el Grupo de Trabajo señaló:

No obstante, sigue siendo motivo de preocupación para el Grupo de Trabajo la tendencia constante a la privación de libertad en algunos países que abusan del estado de excepción o de la suspensión de las garantías constitucionales, invocan facultades excepcionales típicas de los estados de excepción sin una declaración oficial previa, recurren al ejército y a los tribunales especiales o excepcionales, incumplen el principio de proporcionalidad entre el rigor de las medidas adoptadas y la situación real en ese momento y emplean definiciones imprecisas de los delitos, supuestamente con el objeto de proteger la seguridad del Estado y luchar contra el terrorismo.

32. La fuente ha sostenido que el proceso de reforma de 2011 y la decisión adoptada por el Consejo de Ministros sobre la base de las órdenes reales el 1 de septiembre de 2013 no han armonizado las normas jordanas sobre el Tribunal de Seguridad del Estado con el derecho internacional. El Grupo de Trabajo coincide con esa opinión. Señala que el mantenimiento del Tribunal de Seguridad del Estado no satisface los criterios establecidos para una excepción limitada a un sistema de tribunales generales.

*Delitos imprecisos y de carácter excesivamente amplio*

33. El Grupo de Trabajo ha tomado también nota con preocupación de las alegaciones formuladas por la fuente en relación con los delitos generales y de carácter excesivamente amplio tipificados en la legislación penal de Jordania.

---

de 1985, párr. 7.2; N° 139/1983, *Bleier c. el Uruguay*, dictamen aprobado el 29 de marzo de 1982, párr. 13.3.

<sup>3</sup> Véase también el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949, art. 64, y Comité de Derechos Humanos, Observación general N° 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párr. 11.

34. El Comité de Derechos Humanos ha recomendado que se revisen esos delitos, por ejemplo en el párrafo 6 de sus observaciones finales de 2010 sobre el cuarto informe periódico de Jordania (CCPR/C/JOR/CO/4):

Al Comité le preocupa la definición imprecisa y generalizada de "actividades terroristas" que figura en la Ley de prevención del terrorismo, votada en 2006.

El Estado parte debería revisar la Ley de prevención del terrorismo y hacer que el terrorismo y los actos terroristas se definan en esta ley con precisión y de un modo compatible con el Pacto.

35. El propio Grupo de Trabajo, en su jurisprudencia, ha examinado la cuestión de los delitos de carácter excesivamente amplio. El Grupo de Trabajo recuerda sus anteriores opiniones N<sup>os</sup> 1/2003, 13/2007, 1/2009 y 24/2011, relativas a Viet Nam, en las que destacó que:

El Grupo de Trabajo, de conformidad con su mandato, debía asegurarse de que la legislación nacional estaba en conformidad con las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales a los que se hubiera adherido el Estado en cuestión. Por lo tanto, aunque la detención esté de conformidad con la legislación nacional, el Grupo de Trabajo debe cerciorarse de que también lo está con las disposiciones pertinentes del derecho internacional.

36. El Grupo de Trabajo reitera también su conclusión anterior en las opiniones N<sup>os</sup> 1/2009 y 24/2011 de que las disposiciones generales del derecho penal por las que se tipifica como delito "aprovechar las libertades y los derechos democráticos para atentar contra los intereses del Estado" son inherentemente incompatibles con todos los derechos y libertades garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los comentarios del Grupo de Trabajo sobre el reciente proceso de reforma del párrafo 32 *supra* también se aplican aquí.

#### *Observaciones*

37. El Gobierno no ha refutado las alegaciones formuladas relativas a la detención de los Sres. Al Heysah, Al Rawabedah, Assaf y Khoder sin una orden de detención ni acceso a un abogado. Las detenciones practicadas sin la correspondiente orden violan el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las restricciones al acceso a un abogado vulneran los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal y el artículo 14 del Pacto, y se inscriben en la categoría III de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le han presentado.

38. El Gobierno tampoco ha refutado las alegaciones relativas al Tribunal de Seguridad del Estado, los elementos procesales injustos o los delitos de carácter excesivamente amplio. El Grupo de Trabajo recuerda las conclusiones antes señaladas sobre los tribunales especiales en general, y el Tribunal de Seguridad del Estado en particular. Ello añade otro motivo para que el Grupo de Trabajo determine que las detenciones vulneran el artículo 10 de la Declaración Universal y el artículo 14 del Pacto, y se inscriben en la categoría III de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le han presentado.

39. La fuente sostiene que las detenciones se produjeron en respuesta a la participación en manifestaciones. La fuente alega que el Sr. Al Heysah fue detenido después de negarse a firmar un documento declarando que estaba en contra de las manifestaciones celebradas por el Movimiento Juvenil Islámico de Jordania; que el Sr. Al Rawabedah fue detenido después de participar en una manifestación; y que los Sres. Assaf y Khoder fueron detenidos

después de un debate público y de participar en una manifestación. El Gobierno no ha refutado ninguna de esas alegaciones. El Grupo de Trabajo considera que las detenciones violan el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el derecho a la libertad de reunión consagrado en el artículo 20 de la Declaración Universal y en el artículo 21 del Pacto. Las detenciones se inscriben en la categoría II de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le han presentado. El Grupo de Trabajo recuerda además, entre otras cosas, sus opiniones N<sup>os</sup> 18/2007 (Jordania) y 60/2011 (Jordania) relativas a la detención por expresar opiniones políticas y expresa su preocupación por la naturaleza sistémica de las violaciones en esos casos y en el que tiene actualmente ante sí.

40. Por último, el Grupo de Trabajo se centra en la alegación de la fuente relativa a las demoras. La detención de las cuatro personas dura, al parecer, desde junio de 2013 y el Gobierno no ha refutado las alegaciones de demoras. La detención preventiva suscita especial preocupación cuando obedece al ejercicio de la libertad de expresión y reunión, y la observancia por el Estado del derecho a ser juzgado sin dilación indebida, garantizado por el artículo 14 del Pacto, debería ser minuciosamente examinada en esos casos de detención preventiva. Las vulneraciones del derecho a ser juzgado sin dilación indebida, de conformidad con el artículo 11 de la Declaración Universal y el artículo 14 del Pacto, se inscriben en la categoría III de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le han presentado.

#### **Decisión**

41. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emite la siguiente opinión:

La detención de los Sres. Al Heysah, Al Rawabedah, Assaf y Khoder constituye una violación de los artículos 9 a 11, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 12, 14, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La detención se inscribe en las categorías II y III de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le han presentado.

42. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de Jordania que adopte las medidas necesarias para reparar la situación de los Sres. Al Heysah, Al Rawabedah, Assaf y Khoder y hacer que se ajuste a las normas y los principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

43. En el presente caso, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de Jordania que libere de inmediato a los Sres. Al Heysah, Al Rawabedah, Assaf y Khoder y que les conceda el derecho efectivo a obtener reparación, de conformidad con el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

*[Aprobada el 21 de noviembre de 2013]*